

**Advertencia:** Esta Ley ha sido **DEROGADA** y sustituida por la [Ley 167-2020, Art. 17](#).  
Se mantiene en esta [Biblioteca Virtual de OGP](#) únicamente para propósitos de archivo.

## ***“Ley por la Igualdad y Representación Congressional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico”***

Ley Núm. 30 de 5 de junio de 2017, según enmendada

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:

[Ley Núm. 105 de 23 de agosto de 2017](#)  
[Ley Núm. 165 de 30 de diciembre de 2020](#))

Para establecer la “Ley por la Igualdad y Representación Congressional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico”; crear como medida transitoria la “Comisión de la Igualdad para Puerto Rico” adscrita a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, constituida por la primera delegación de dos Senadores y cinco Representantes Federales que promoverán en el Congreso y el Gobierno Federal el cumplimiento del mandato electoral en el plebiscito del 6 de noviembre de 2012 y cualquier otro mandato electoral futuro que sea equivalente, rechazando la actual condición territorial colonial y reclamando la admisión como un estado de la Unión en igualdad de derechos y deberes con los ciudadanos de los demás estados; y para otros fines.

### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La isla de Puerto Rico, con 3.5 millones de habitantes, es la colonia de mayor población y la más antigua entre los pueblos del mundo civilizado; y es una colonia habitada por ciudadanos de los Estados Unidos de América, a los que se nos priva de los plenos derechos democráticos que disfrutaban los ciudadanos americanos residentes en los cincuenta estados.

Desde 1898, por disposición del Tratado de París que concluyó la Guerra Hispanoamericana, la isla de Puerto Rico ha sido poseída por los Estados Unidos de América y sus habitantes gobernados por las leyes y decretos de su Congreso y Presidente.

En 1917, el Congreso legisló la ciudadanía estadounidense para los habitantes de Puerto Rico. De esa época a la presente, los puertorriqueños no votamos por el Presidente ni podemos elegir delegados con voto al Congreso que nos gobiernan. El Pueblo de Puerto Rico ha derramado sangre en todas las guerras y conflictos bélicos en que se ha involucrado Estados Unidos por determinación de un Presidente (Commander in Chief) que no elegimos; y, con la única excepción de la contribución federal sobre ingresos obtenidos en el territorio, cumplimos y pagamos todas las contribuciones, arbitrios y obligaciones monetarias que nos impone un Congreso en el que no tenemos representación justa.

En efecto, Puerto Rico tiene que cumplir con las leyes y decretos de los poderes Ejecutivo y Legislativo que, durante el curso de los pasados 119 años, se constituyeron sin el respaldo democrático de los habitantes de la isla.

### Orígenes

El 25 de julio de 1898, Estados Unidos invadió a Puerto Rico. La presa de aquella acción militar no fue un peñón deshabitado o de subcultura indígena. Estados Unidos ocupó una isla con más de un millón de habitantes, de gente civilizada, con estructura pública organizada y con la participación de partidos políticos democráticos bajo el instrumento de una Carta Autonómica con España.

En las deliberaciones del Tratado de París, la representación diplomática de Estados Unidos y España nunca tomó en consideración la opinión o preferencia de los puertorriqueños, reduciéndonos a ser agregados de una finca o propiedad cedida por un bando al otro.

Superando esos antecedentes, el liderato político puertorriqueño de la época reaccionó ágil y positivamente a la realidad de la nueva Metrópoli. Ya en 1899, se organizaron dos partidos políticos principales, el Republicano y el Federal, encaminados hacia la asimilación que solicitaron de la Capital Federal. De ahí, la inacción, el titubeo e improvisación del Congreso incitaron a la consecuencia de otros reclamos, incluido el de la independencia.

A Cuba, la otra colonia española del Caribe tomada por las armas en 1898, el Congreso le reconoció su independencia en 1902, apenas cuatro años de concluida la Guerra Hispanoamericana. Puerto Rico, recibió un trato diferente. En lugar de la independencia, el Congreso otorgó a los puertorriqueños la Ciudadanía Americana. El mensaje quedó así claramente informado: En Puerto Rico nos quedamos.

No obstante, a lo largo del Siglo XX e iniciado el Siglo XXI, qué hacer con la “colonia”, el “territorio”, la “propiedad” de Puerto Rico, ha sido el gran dilema que ante los ojos del mundo desmoraliza, humilla y denigra el prestigio democrático de los Estados Unidos de América.

### Sin consentimiento

En 1952, entre San Juan y Washington D.C., fue creado un proyecto para maquillar esta subyugación colonial. Se autorizó al “pueblo de Puerto Rico” a convocar una Asamblea Constituyente, redactar una Constitución, someterla al Congreso para aprobación y ratificarla en referéndum. El liderato político puertorriqueño dominante en la época intentó sublimar el proceso bajo la pretensión de haberse creado un nuevo estatus autonómico con el nombre de “Estado Libre Asociado”.

En 1953 elevaron esta mentira a la Organización de las Naciones Unidas para liberar a Washington de la humillante obligación de rendir informes anuales sobre Puerto Rico al Comité Descolonizador. El curso inexorable de la historia se ocupó del espejismo: El dominio absoluto del Congreso bajo la Cláusula Territorial; el resultado de consultas plebiscitarias y el constante reclamo sobre el estatus político; las opiniones del Departamento de Justicia Federal y del Congreso, y las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos que tan recientemente como en 2016, dejaron claramente establecida la situación colonial mediante sus opiniones y decisiones

jurídicas; y la revalidación progresiva del movimiento estadista fundado desde comienzos de Siglo XX.

El 6 de noviembre de 2012, la voluntad del pueblo puertorriqueño quedó expresada en las urnas: el 53.97% votó su inconformidad y rechazo al estatus colonial vigente; y el 61.16% votó su preferencia por la Estadidad.

Desde entonces, el consentimiento cuestionado del “pueblo de Puerto Rico” a la relación configurada mediante el proceso constitucional de 1952, quedó retirado. Para todo efecto político, desde 2012, los Estados Unidos de América ejercen poderes de dominio colonial sobre Puerto Rico, sin el consentimiento de los puertorriqueños y en violación al derecho internacional.

### Un debate inconcluso

La incoherencia fundamental que se planteó Estados Unidos de América cuando adquiere las colonias españolas en 1898, fue advertida desde el mismo comienzo al debatirse la ratificación del Tratado de París. Se opusieron tenazmente figuras nacionales del más alto calibre, entre las que se destacaron: el Presidente número 22 de Estados Unidos Grover Cleveland, y el Presidente número 23 Benjamin Harrison; el Secretario de Estado de la Administración Wilson, William Jennings Bryan; los escritores e intelectuales Mark Twain, William James, E. L. Godkin y Andrew Carnegie. La argumentación esgrimida contra la ratificación del tratado fue moralmente devastadora.

Describieron como un acto innatural, absurdo, grotesco que a los 122 años de fundada una nación forjada mediante un acto de guerra para liberarse del imperialismo europeo, se propusiera transmutarse a imperio poseedor de las antiguas colonias europeas. Entonces, quedó planteado que, arrebatar las colonias españolas para poseerlas y gobernarlas, implicaba renunciar los principios básicos que dieron vida a la Unión Americana.

El Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 (Cláusula Territorial de la [Constitución de los Estados Unidos de América](#)) es en nuestro tiempo una disposición arcaica, moral y políticamente impugnable. Dicha cláusula fue redactada en su origen para atender el potencial de crecimiento nacional que ofrecían los territorios contiguos continentales en los albores del Siglo XX empleada para adquirir, poseer y administrar colonias.

Aquel gran debate queda inconcluso por el hecho de que el Congreso, tras admitir a los habitantes de Puerto Rico como ciudadanos en 1917, carga hoy todavía la ignominiosa responsabilidad de mantenerlos en estatus de inferioridad, subyugación y desigualdad colonial.

### Consecuencias económicas

Es evidente que, bajo la tutela de Estados Unidos, aunque sin ser un estado, el empobrecido Puerto Rico de 1898 experimentó una transformación económica. La asimilación socioeconómica resultante creó por un tiempo un pueblo saludable y progresista. Ello, adaptado al modelo capitalista estadounidense, pero conservando las raíces y los valores de su cultura hispánica.

Esa transformación fue beneficiosa tanto para el colonizado como para el colonizador. Hubo aprovechamiento de orden geopolítico y militar significativos en época de guerra. El monocultivo azucarero en la Isla sirvió como base empresarial a la industria y el mercado agrícola estadounidense continental. La transformación industrial y el desarrollo económico alcanzados en

Puerto Rico potenciaron la influencia estadounidense en Latinoamérica en contrapeso a la infiltración comunista hemisférica agenciada desde Cuba durante los años de la “Guerra Fría”. Y, como corolario, el poder adquisitivo desarrollado en la Isla nos convirtió en el más lucrativo mercado hemisférico consumidor para los Estados Unidos Continentales.

El fracaso económico y social del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos se ha evidenciado con mayor claridad en los últimos años. Puerto Rico en los últimos 10 años ha sufrido una contracción económica de 14.6% y la pérdida de 300,000 habitantes. Puerto Rico se encuentra con un déficit de más de \$7,000 millones de dólares como resultado de la desigualdad y limitaciones de la colonia.

La crisis económica, financiera y presupuestaria que hoy enfrenta el Gobierno de Puerto Rico tiene, por igual, dos vías de procedencia. La clase gobernante y administradores públicos que se turnaron el poder durante los pasados años cometieron errores y acumularon una deuda monumental obligados por las limitaciones de la colonia. Además, está el costo de 119 años durante los que Puerto Rico vivió el limbo colonial sin las herramientas económicas que tienen los estados de la Unión y los países soberanos e independientes.

Cuando Alaska y Hawaii ingresaron a la Nación como estados, su ingreso per cápita promedio aumentó 69% y 52%, respectivamente. Este aumento se reflejó a sólo 10 años de sus admisiones como estados. En Alaska las exportaciones se triplicaron y el turismo en Hawaii aumentó en un 20% y se triplicaron el número de habitaciones de hotel. Por su parte, la inversión extranjera en Hawaii, luego de su admisión, aumentó de \$168 millones a \$625 millones. En Alaska y Hawaii el ingreso promedio es de \$65,000 al año mientras que en Puerto Rico es menor de \$19,000.00.

Hoy, Puerto Rico es el mal ejemplo del proyecto colonial fracasado que los adversarios de Estados Unidos utilizan para desprestigiarlo.

El federalismo es la solución. El modelo colonial fracasado impide a Puerto Rico alcanzar la plenitud económica y social. Habilitado para la Estadidad como se habilitó a los territorios de Alaska y Hawái, el Estado de Puerto Rico podrá aportar como esos dos antiguos territorios ahora aportan proporcionalmente a la fuerza económica de la Unión.

## Soluciones

La solución final y definitiva para el problema colonial del estatus político de Puerto Rico es la estadidad federada que ya obtuvo un mandato amplio y contundente de las urnas en la consulta de 2012.

Cada vez que asoma el tema colonial de Puerto Rico al escenario nacional o internacional, la clase gobernante en Washington expresa su respeto a la “libre determinación” del pueblo puertorriqueño. En su intervención de este verano para responder al informe del Comité Descolonizador, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU Samantha Power, dijo: “El Pueblo de Puerto Rico tiene el derecho a su autodeterminación escogiendo entre tres fórmulas descolonizadoras reconocidas por el derecho internacional; la estadidad, la independencia y la libre asociación.” La autodeterminación del pueblo puertorriqueño escogiendo la “fórmula descolonizadora” de la estadidad, ya fue expresada en la consulta sobre estatus político de 2012.

Es hora de reconocer hechos irrefutables y verdades categóricas. El Congreso ha dismantelado el andamiaje constitucional de 1952. El [Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act](#), mejor conocido por PROMESA, aprobado por el Congreso en 2016, otorgó a los

miembros designados de su junta poderes que subvierten los que la Constitución de Puerto Rico otorga a los funcionarios más altos que elige el pueblo de Puerto Rico: el Gobernador, los miembros de la Asamblea Legislativa y los Alcaldes. Para todo fin práctico, el Congreso nos retrocedió a la época cuando el Gobernador, el Tesorero y miembros de la Rama Judicial fueron designados desde Washington; y cuando el Presidente tenía la potestad de vetar el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

El retroceso hacia el colonialismo más crudo del pasado, da mayor urgencia al reclamo de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico a que se atienda la agenda descolonizadora. La historia nos enseña que, en la cultura democrática estadounidense, los derechos no se piden ni se suplican; se exigen y se demandan.

Esta Asamblea Legislativa, por tanto, decide adoptar por medio de esta Ley, el Plan de la Igualdad que otros territorios usaron para convertirse en estados para establecer el Proyecto Habilitador de la Primera Delegación Puertorriqueña al Congreso de Estados Unidos, con la demanda de que se reconozca, acepte y respete la voluntad expresada libre y democráticamente en las urnas por nuestros ciudadanos con capacidad electoral el 6 de noviembre de 2012, cuando por abrumadora mayoría rechazaron el estatus colonial y manifestaron su preferencia por la admisión de Puerto Rico como un Estado de la Unión; y de que se reconozca a estos delegados como los primeros representantes y senadores del nuevo Estado.

El Proyecto Habilitador de la Primera Delegación Puertorriqueña al Congreso de Estados Unidos, es el acto normal, natural, legítimo, lógico de un pueblo que exige y demanda sus derechos democráticos más fundamentales como ciudadanos de los Estados Unidos de América.

La lucha y el reclamo por la admisión del Estado de Puerto Rico a la Unión, es tanto un deber de legitimación democrática para los ciudadanos Americanos puertorriqueños, como es de reafirmación democrática a los principios que crearon a la Unión para los Ciudadanos Americanos de los cincuenta estados de la Unión.

Para validarse ante el mundo entero como ejemplo democrático a imitar y seguir, los Estados Unidos de América tienen que honrar en Puerto Rico los principios bajo los cuales se proclamaron en 1776 como una unión independiente del imperialismo europeo; tienen que honrar las vidas ofrendadas y la sangre vertida por miles de sus conciudadanos puertorriqueños en los campos de batalla; y tienen que demostrar que América sigue fiel al modelo de convivencia multinacional y multicultural que abrió puertas a los peregrinos del mundo entero, para con la aportación de todos constituirse en la nación más soberana, libre, independiente y poderosa que existe sobre la faz de la tierra.

A Puerto Rico, ha llegado la hora de demandar y exigir lo que por derecho nos corresponde; a Washington, la de oír la voz moral de sus ancestros y honrar los ideales consagrados en la historia de los Estados Unidos de América.

Esta medida es una de las piezas claves para provocar que el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América atienda el problema de estatus colonial que evita el crecimiento social y económico de Puerto Rico.

Por ello, y a tenor con la [Ley Pública 113-76 \(2014\)](#), esta Asamblea Legislativa aprobó la [Ley 7-2017 conocida como la “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico”](#). Esta pieza permite al pueblo puertorriqueño utilizar legislación federal para empujar la agenda de descolonización avalada en las urnas en el año 2012. Por su parte, la presente medida permite

utilizar otro mecanismo para lograr el mismo fin, según lo propuso la actual Administración al pueblo en el Plan para Puerto Rico.

*Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:*

**Artículo 1. — Título.** (3 L.P.R.A. § 1721)

Esta Ley se conocerá como “Ley por la Igualdad y Representación Congressional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico”.

**Artículo 2. — Definiciones.** (3 L.P.R.A. § 1722)

Para propósitos de esta Ley, el término:

- (a) **“Asamblea Legislativa”** – significa en conjunto la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico.
- (b) **“Comisión”** – significa la “Comisión de la Igualdad para Puerto Rico” que, según se provee en esta Ley, es una entidad legal del Gobierno de Puerto Rico para constituir su “delegación congressional” e instrumentar el mandato electoral de los ciudadanos americanos de Puerto Rico, según expresado en el plebiscito realizado el 6 de noviembre de 2012, en la consulta de estatus celebrada el pasado 11 de junio de 2017, y la política pública adoptada en esta Ley.
- (c) **“Congresista”** – significa, indistintamente, cualquier persona natural que haya sido designada o electa para representar a Puerto Rico como “Representante” o “Senador”, en la Cámara de Representantes o el Senado de los Estados Unidos de América, respectivamente.
- (d) **“Congreso”** – significa en conjunto la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos de América.
- (e) **“Delegación congressional”** – se refiere colectivamente a los dos (2) “Senadores” y la cantidad de “Representantes” que correspondan por población para representar a los ciudadanos americanos de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos a través de la Comisión de la Igualdad creada por esta Ley; y hasta que ellos o sus sucesores sean electos en elección congressional.
- (f) **“Fondo Rotatorio”** — tendrá carácter permanente y rotatorio, a los fines de que todo sobrante al cierre de cada año fiscal permanecerá en el Fondo para su capitalización y la atención de gastos futuros.
- (g) **“Gobernador”** – significa el Gobernador de Puerto Rico.
- (h) **“Presidente”** – significa el Presidente de los Estados Unidos de América.
- (i) **“Representante”** – significa toda persona natural que ocupe una posición en la Comisión de la Igualdad o que haya sido electa y certificada en una elección congressional como Representante de un Distrito Congressional de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América y durante términos de dos (2) años.
- (j) **“Senador”** - significa toda persona natural que ocupe una posición en la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico o que haya sido electa y certificada en una elección congressional como Senador “Clase I”, “Clase II” o “Clase III” del Estado de Puerto Rico en el Senado de los Estados Unidos de América.

(k) “**Senador Clase I**” – significa el término utilizado en las normas federales para clasificar a un miembro del Senado de los Estados Unidos de América electo por voto directo en elección congressional por un periodo equivalente a los años restantes del término de los senadores pertenecientes a la Clase I, y a partir del vencimiento del mismo, electo en elecciones congressionales sucesivas por cada término de seis (6) años como Senador Clase III.

(l) “**Senador Clase II**” – significa el término utilizado en las normas federales para clasificar a un miembro del Senado de los Estados Unidos de América electo por voto directo en elección congressional por un periodo equivalente a los años restantes del término de los senadores pertenecientes a la Clase II, y a partir del vencimiento del mismo, electo en elecciones congressionales sucesivas por cada término de seis (6) años como Senador Clase III.

### **Artículo 3. — Declaración de Política Pública.** (3 L.P.R.A. § 1723)

En el Plebiscito de 3 de noviembre de 2020, y por tercera vez consecutiva durante los últimos ocho (8) años, la mayoría absoluta de los electores de Puerto Rico reclamó la igualdad de deberes y derechos como ciudadanos americanos con la estadidad.

Ese resultado electoral a favor de la estadidad constituye un mandato del Pueblo a su gobierno y un fin público con la más alta prioridad. Constituye, además, el ejercicio de los ciudadanos americanos de Puerto Rico de su derecho fundamental, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución federal, a los fines de que su Gobierno federal repare el agravio de la actual condición territorial establecida hace 122 años.

De manera inmediata, según lo dispone la [Ley 51-2020, conocida como “Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico”](#), debe comenzar un proceso de transición para cesar en Puerto Rico la imposición de cualquier condición territorial y colonial en todas las modalidades e interpretaciones jurídicas del Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 de la [Constitución de los Estados Unidos de América](#); y encaminar a Puerto Rico, en el menor plazo posible, a la igualdad de derechos y deberes como un estado de la Unión bajo la Constitución de los Estados Unidos de América.

Los ciudadanos americanos de Puerto Rico están organizados internamente con una forma republicana de gobierno, y gobernados bajo el palio de una Constitución avalada por el Congreso y el Presidente; y compatible con todos los requisitos que impone la [Constitución de los Estados Unidos de América](#) para los estados de la Unión.

Las gestiones de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico creada por esta Ley, adquieren mayor urgencia y, por lo tanto, los recursos que son necesarios para cumplir sus propósitos y el mandato electoral del Pueblo de Puerto Rico.

### **Artículo 4. — Medidas Transitorias para Constituir la Representación Congressional de los Ciudadanos Estadounidenses de Puerto Rico.**

**Sección 1. — Creación de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico.** (3 L.P.R.A. § 1724)

- (a) Se crea como una entidad legal del Gobierno de Puerto Rico.
- (b) La Comisión tendrá un sello oficial con las palabras “Puerto Rico Statehood Commission” y el diseño que dicha entidad disponga.
- (c) La Comisión deberá contar con un portal bilingüe, con los idiomas español e inglés, en el Internet con información sobre sus propósitos y gestiones.
- (d) La Comisión estará adscrita a Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (en adelante, PRFAA por sus siglas en inglés).

**Sección 2. — Deberes y Facultades de la Comisión.** (3 L.P.R.A. § 1725)

La Comisión tendrá los siguientes deberes y facultades:

- (a) Dar riguroso y urgente cumplimiento al mandato electoral y la política pública expresadas en el Artículo 3 de esta Ley, incluyendo la promoción y la defensa de cualquier otro mandato electoral futuro de los electores de Puerto Rico que sea equivalente, incluyendo el resultado de la consulta a celebrarse al amparo de la [Ley 7-2017, conocida como la “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico”](#).
- (b) Ejercer todos los poderes y funciones inherentes a la delegación congressional del Estado de Puerto Rico, declarada vacante de acuerdo con el Artículo 3 (f) de esta Ley.
- (c) Educar, abogar y promover la admisión de Puerto Rico como estado de los Estados Unidos y la obtención de la total igualdad de derechos y deberes para los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.
- (d) Solicitar, gestionar y exigir participación y reconocimiento como Congresistas de los ciudadanos americanos de Puerto Rico en el Senado y en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América.
- (e) Asesorar al Gobernador de Puerto Rico, a las agencias, instrumentalidades públicas y subdivisiones políticas del Gobierno de Puerto Rico y al público en general sobre todos los aspectos legales y políticos que involucren la promoción de la admisión de Puerto Rico como estado de los Estados Unidos de América.
- (f) Comparecer ante el Congreso, la Casa Blanca, las agencias y tribunales federales para expresarse con relación a cualquier asunto enmarcado dentro de su competencia.
- (g) Demandar y ser demandada en reclamaciones o causas de acción a nombre propio en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico contra cualquier persona natural o jurídica que incumpla o interfiera con los requisitos, fines y objetivos de esta Ley.
- (h) Estudiar, fomentar y facilitar el desarrollo de iniciativas para promover la admisión de Puerto Rico como estado de los Estados Unidos de América y la obtención de la igualdad de derechos y deberes para todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.
- (i) Preparar y presentar al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa, en la Secretaría de cada cámara, un informe anual que detalle todos los esfuerzos, gestiones, iniciativas y proyectos realizados por la Comisión para cumplir con sus deberes y facultades. Este informe será presentado no más tarde del 30 de junio del año siguiente al año calendario objeto de informe y a partir del año calendario 2017.

(j) Realizar toda acción legal o civil que sean necesarias para promover la admisión de Puerto Rico como estado de los Estados Unidos, incluyendo la participación de sus miembros en foros y en las prensas estatales, nacionales e internacionales.

(k) Adoptar reglamentos sobre su funcionamiento interno.

(l) La Comisión queda autorizada para solicitar y aceptar donaciones por parte de personas naturales y jurídicas de cualquier jurisdicción de Estados Unidos de América, sean públicas o privadas. No más tarde de los treinta (30) días a partir de la aprobación de esta Ley, el Secretario de Hacienda pondrá en vigor las reglas para la solicitud, recibo, depósito y gasto de estas donaciones en el Fondo Rotativo de la Comisión de la Igualdad creado por esta Ley, incluyendo las máximas deducciones contributivas posibles para los donantes, según el Código Contributivo vigente.

### **Sección 3. — Composición de la Comisión.** (3 L.P.R.A. § 1726)

(a) Se compondrá de siete (7) miembros: dos (2) Senadores y cinco (5) Representantes.

(b) Los Representantes y los Senadores miembros de la Comisión, representarán por acumulación al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos, hasta que otra cosa se disponga por Ley.

### **Sección 4. — Nombramientos.** (3 L.P.R.A. § 1727)

(a) El Gobernador, no más tarde de los treinta (30) días a partir de la aprobación de esta Ley, otorgará nombramiento a la totalidad de los miembros de la Comisión y designará a uno de sus miembros como presidente. Los miembros de la Comisión se considerarán de confianza a discreción del Gobernador.

(b) Los miembros designados de la Comisión requerirán el consejo y consentimiento de la mayoría de los miembros de cada cámara de la Asamblea Legislativa previo a prestar el juramento de su cargo.

(c) Una vez confirmados por la Asamblea Legislativa, pero antes de ocupar sus cargos en la Comisión, todos los miembros deberán afirmar que ejercerán las funciones delegadas en esta Ley sin remuneración alguna de fondos públicos y sus actividades serán sufragadas de fondos privados.

(d) El anterior juramento será tomado por el Secretario de Estado no más tarde de los cinco (5) días calendario a partir de la Asamblea Legislativa haber confirmado a cada uno de los miembros de la Comisión.

(e) Los dos (2) senadores deberán tener al menos treinta (30) años de edad cumplidos al momento de su nombramiento, haber sido ciudadanos de los Estados Unidos de América durante los nueve (9) años anteriores a su nombramiento, hablar y escribir los idiomas inglés y español con fluidez y ser electores y residentes en Puerto Rico.

(f) Los cinco (5) representantes deberán tener al menos veinticinco (25) años cumplidos al momento de su nombramiento, haber sido ciudadanos de los Estados Unidos de América durante los siete (7) años anteriores a su nombramiento, hablar y escribir los idiomas inglés y español con fluidez y ser electores y residentes en Puerto Rico.

(g) Los miembros de la Comisión costearán sus gastos con fondos privados y aceptan no solicitar reembolsos o dietas con cargo a cualquier fondo público. Los donativos para costear los gastos y/o

actividades de los miembros de la Comisión se registrarán en la Oficina del Contralor Electoral a los únicos efectos de hacerlos públicos y su utilización será exclusivamente para cumplir los propósitos de la presente Ley. Ningún miembro podrá utilizar las funciones otorgadas en la presente Ley para fines personales o privados ajenos a los dispuestos en la misma. Los miembros de la Comisión no utilizarán fondos públicos ni se considerarán funcionarios ni servidores públicos para efectos de la [Ley 1-2012, según enmendada](#). No obstante lo anterior, el Gobernador de Puerto Rico podrá solicitar a los miembros de la Comisión una certificación de cumplimiento con las leyes fiscales. Las acciones de la Comisión y sus miembros dentro del marco de las facultades y deberes de la presente Ley se considerarán cubiertas al amparo de la [Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada](#).

**(h), (i) y (j)** [Nota: La Sec. 3 de la [Ley 105-2017](#) derogó estos incisos, aunque la Colección de L.P.R.A. (3 L.P.R.A. § 1727) los mantiene. Evidentemente se contradicen con el enmendado inciso(g)]

#### **Sección 5. — Vacantes en la Comisión.** (3 L.P.R.A. § 1728)

**(a)** A solicitud de la mayoría de los miembros de la Comisión o por iniciativa propia, el Gobernador podrá declarar vacante la posición de cualquier miembro de la Comisión por falta de confianza o por incumplimiento de sus deberes con esta Ley o los reglamentos adoptados por la Comisión.

**(b)** Cuando por cualquier razón se produzca una vacante de representante o senador en la Comisión, el Gobernador nombrará al sucesor dentro del término de treinta (30) días a partir de ser oficializada la vacante, siempre que haya verificado que el sustituto cumple con todos los requisitos constitucionales y legales para ocupar el puesto. El sustituto deberá cumplir con todos los requisitos y procedimientos dispuestos en este Artículo.

#### **Sección 6. — Reglamento Internos.** (3 L.P.R.A. § 1729)

La Comisión deberá preparar y aprobar un reglamento para gobernar sus asuntos internos en o antes de los treinta (30) días calendario a partir de ser juramentada la totalidad de sus miembros. Copia de ese u otros reglamentos aprobados por la Comisión deberán ser registrados ante el Secretario de Estado de Puerto Rico no más tarde de los cinco (5) laborables posteriores a su aprobación. Los reglamentos de la Comisión no estarán sujetos a [Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”](#).

#### **Sección 7. — Funcionamiento Interno.** (3 L.P.R.A. § 1730)

**(a)** La Comisión deberá reunirse por lo menos en una ocasión cada mes.

**(b)** Un total de cuatro (4) de sus miembros, de los cuales al menos uno deberá ser Senador, constituirá el quórum una vez la totalidad los miembros designados tomen posesión de sus cargos.

**(c)** Todos los acuerdos de la Comisión reunida en sesión mensual serán adoptados por unanimidad de los miembros presentes y constituidos en quórum. En ausencia de unanimidad, el asunto deberá ser presentado a la consideración del Gobernador no más tarde de los cinco (5) días laborables a partir de concretarse la ausencia de unanimidad. El Gobernador deberá comunicar su decisión no más tarde de los tres (3) días calendario a partir del recibo de la comunicación de ausencia de

unanimidad. La decisión del Gobernador, una vez comunicada a la Comisión, advendrá como final y firme y será de cumplimiento para todos los miembros de la Comisión. En caso del Gobernador decidir no intervenir, entonces prevalecerá la decisión mayoritaria de la Comisión y será de cumplimiento para todos los miembros de la Comisión. A los fines de este inciso, para que prevalezca la decisión mayoritaria, será necesaria la concurrencia del voto de al menos uno de los Senadores que forman parte de la Comisión.

(d) En situaciones extraordinarias, que surjan fuera de los días de las reuniones mensuales de la Comisión, el Presidente de la Comisión podrá consultar y someter a votación asuntos impostergables con la totalidad de los miembros mediante comunicación escrita o telefónica. En ausencia de acuerdo unánime, se procederá conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

### **Sección 8. — Presupuesto de la Comisión. (3 L.P.R.A. § 1731)**

A partir del 1ro. de julio de 2021, y sucesivamente en cada año fiscal, se asignará a la Comisión un presupuesto anual de un millón doscientos cincuenta mil dólares (\$1,250,000.00) para cubrir sus gastos de funcionamiento, planes de acción, servicios profesionales y mediáticos, entre otros, y aquellos gastos en los que incurran sus miembros; y que sean equivalentes a los que se pagan con fondos públicos a cualquier funcionario en gestiones oficiales dentro y fuera de Puerto Rico. Los gastos evidenciados de viajes, transportación, dietas y alojamiento en los que deban incurrir los miembros de la Comisión a partir de la vigencia de esta Ley, serán reembolsados por PRFAA con cargo a la asignación presupuestaria dispuesta en esta Ley para el Año Fiscal 2021-22.

La asignación presupuestaria anual se consignará en un Fondo Rotatorio de la Comisión de la Igualdad y bajo la custodia de la [Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico \(PRFAA\), creada por la Ley 77-1979, según enmendada](#). Se prohíbe el uso de dinero de este Fondo para otros propósitos que no sean los autorizados por la mayoría de los miembros de la Comisión de la Igualdad. Este Fondo tendrá carácter permanente y rotatorio, a los fines de que todo sobrante al cierre de cada año fiscal permanecerá en el Fondo para su capitalización y la atención de gastos futuros.

La intervención de PRFAA en este Fondo se limitará a recibir y custodiar las asignaciones presupuestarias y las donaciones, llevar controles contables, administrativos y realizar los desembolsos con rapidez. La facultad de determinar cómo y en qué asuntos se invierten estos fondos corresponderá solamente a las decisiones tomadas por la mayoría de los miembros de la Comisión, quienes serán los responsables por tales gastos.

Los recursos económicos para este Fondo provendrán de los recaudos de las contribuciones impuestas a las corporaciones. Estas asignaciones y el Fondo quedan exentos de la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal, según se dispone en la Sección 402 de la [Ley Pública 113-76 \(2014\), conocida como “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act” \(PROMESA\)](#).

## **Artículo 5. — Disposiciones generales.**

### **Sección 1. — Leyes en conflicto. (3 L.P.R.A. § 1732)**

En los casos en que las disposiciones de esta Ley estén en conflicto, o sean inconsistentes con las disposiciones de cualquier otra ley, prevalecerán las disposiciones de esta Ley.

### **Sección 2. — Cláusula de Separabilidad.**

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

### **Sección 3. — Cláusula Anti Injunction. (3 L.P.R.A. § 1733)**

No se expedirá injuncion alguno para impedir la aplicación de esta Ley o cualquier parte de la misma.

## **Artículo 6. – Prohibiciones y Delitos** [Nota: La Ley 165-2020 añadió este nuevo Art. 6 y renumeró el subsiguiente]

Toda persona que obstruyera o interrumpiera las actividades o las asignaciones presupuestarias relacionadas con esta Ley, o incumpliera con sus disposiciones, o incumpliera con las obligaciones y los deberes que esta Ley le impone, incurrirá en delito grave y, convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión que no será menor de un (1) año ni mayor de tres (3) años o con multa que no excederá de diez mil dólares (\$10,000) o ambas penas a discreción del Tribunal.

## Artículo 7. — Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Nota. Este documento fue compilado por personal de la [Oficina de Gerencia y Presupuesto](#) del Gobierno de Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la [Oficina de Servicios Legislativos](#) de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la [US Government Publishing Office GPO](#) de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del [Departamento de Estado](#) del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Véase además la [Versión Original de esta Ley](#), tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

⇒ ⇒ ⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la **Última Copia Revisada** (Rev.) para esta compilación.

Ir a: [www.ogp.pr.gov](http://www.ogp.pr.gov) ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—Z-DEROGADAS.